



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

Señor
Juez Administrativo del Circuito (Reparto)
Guadalajara de Buga - Valle del Cauca
E. S. D.

Medio de Control: Reparación Directa

Demandantes: Sandra Julieth Cifuentes y Otros.

Demandados: Nación-Rama Judicial, y Fiscalía General de la Nación.

Es mi nombre **CLAUDIA LILIANA RESTREPO ESPINOSA**, mayor de edad y vecina de la ciudad de Tuluá Valle, identificada con la C.C No. 29.873.663 de Tuluá Valle, Abogada titulada y en ejercicio con T.P No 173108 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me han conferido las señoras **SANDRA JULIETH CIFUENTES** en nombre propio y en representación del menor **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES (hijo)**, **MARIA ARACELLY CIFUENTES DÍAZ (madre)** y **MARÍA EUGENIA CIFUENTES CIFUENTES (hermana)**; por medio del presente escrito, con todo respeto, acudo ante su Señoría, en ejercicio **DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA** consagrado en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo (LEY 1437 de 2011), **DEMANDAMOS a la Nación-Rama Judicial representada por el señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial Seccional – Valle del Cauca, designado para la Representación Judicial de la Nación-Rama Judicial ante lo contencioso administrativo y a la Nación - Fiscalía General de la Nación o a su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo**, previos los trámites del proceso ordinario contencioso-administrativo, surtido con citación y audiencia del señor **Agente del Ministerio Público y del delegado de La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**, para que se ordene la **REPARACION DIRECTA**, a cargo de la Nación Rama Judicial y Nación Fiscalía General de la Nación, equivalente a la indemnización integral de los perjuicios causados por hechos u omisiones que deben derivar responsabilidad del Estado, para que en sentencia de merito se pronuncien sobre las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERO: La Nación-Rama Judicial y La Nación-Fiscalía General de la Nación, representadas en este caso por el señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial, designado para la representación de la Nación-Rama Judicial, Seccional Valle, y por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, es responsable administrativamente por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales o inmateriales causados a las señoras **SANDRA JULIETH CIFUENTES** en



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

nombre propio y en representación de **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES** (hijo), **MARIA ARACELLY CIFUENTES DÍAZ** (madre) y **MARÍA EUGENIA CIFUENTES CIFUENTES** (hermana), por la **detención injusta** e ilegítima que sufriera la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**.

SEGUNDO: Condenar, en consecuencia de la anterior declaración a **La Nación-Rama Judicial y La Nación-Fiscalía General de la Nación**, representadas en este caso por el señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial, designado para la representación de la Nación-Rama Judicial, Seccional Valle, y por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, como **reparación del daño antijurídico ocasionado**, a pagar a la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, o a quien represente sus derechos, los perjuicios patrimoniales - Materiales actuales y futuros, los cuales se estiman en cuantía superior a la suma de **\$18.376.550 =M/C**, y extrapatrimoniales o inmateriales, los cuales se estiman como mínimo en la suma de **CIENTO TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/Cte (\$ 103.096.000=M/C)**, de conformidad con lo previsto en el Acta No 23 del 25 de Septiembre de 2013 emanado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso.

TERCERO: Condenar, en consecuencia de la anterior declaración a **La Nación-Rama Judicial y a La Nación-Fiscalía General de la Nación**, representadas en este caso por el señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial, designado para la representación de la Nación-Rama Judicial, Seccional Valle, y por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, como reparación del daño antijurídico ocasionado, por la detención que sufriera su hermana la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, a pagar a la señora; **MARÍA EGUENIA CIFUENTES CIFUENTES**, o a quien represente sus derechos por los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales actuales y futuros, los cuales se estiman en cuantía superior a **OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (\$51.548.000=M/C)**, actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en EL Acta No 23 del 25 de Septiembre de 2013 emanado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso.

CUARTO: Condenar, en consecuencia a **La Nación-Rama Judicial y La Nación-Fiscalía General de la Nación**, representadas en este caso por el señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial, designado para la representación de la Nación-Rama Judicial, Seccional



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

Valle, y por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, como reparación del daño antijurídico ocasionado por la detención que sufriera su señora madre **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, a pagar al **menor JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES**, o a quien represente sus derechos, por los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales actuales y futuros, cuantía superior a la suma de **OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (\$51.548.000.00=M/C)**, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso, actualizada al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A.

QUINTO: Condenar, en consecuencia de la anterior declaración a **La Nación-Rama Judicial y La Nación-Fiscalía General de la Nación**, representadas en este caso por el señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial, designado para la representación de la Nación-Rama Judicial, Seccional Valle, y por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, como reparación del daño antijurídico ocasionado, por la detención que sufriera su hija la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, a pagar a **MARIA ARACELLY CIFUENTES DÍAZ**, o a quien represente sus derechos por los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales actuales y futuros, los cuales se estiman en cuantía superior a los **OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (\$51.548.000.00=M/C)**, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso, actualizada al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A.

SEXTO: La condena respectiva será indexada, actualizada de conformidad con lo previsto en el art. 187 inciso final del C.C.A.(Ley 1437 de 2011), aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo y su pago efectivo por la entidad condenada y de conformidad con las formulas que para el efecto ha establecido o establezca el Honorable Consejo de Estado.

SEPTIMO: A la sentencia que ponga fin al presente proceso se le dará cumplimiento en los términos del artículo 187 inciso final del C.C.A.(Ley 1437 de 2011) Las condenas devengaran intereses moratorios hasta que se verifique el pago total y efectivo conforme a los art. 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO: Se condene en costas, agencias en derecho a la parte demandada conforme al art. 188 de la Ley 1437 de 2011.



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

HECHOS

1.- La señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, se identifica con la C.C No. 1.116.235.919 de Tuluá – Valle del Cauca, mujer de 30 años de edad y de Estado Civil soltera, madre cabeza de familia, trabajadora, dedicada a su único hijo **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES**.

2.- SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES, fue capturada, imputada, encarcelada y finalmente absuelta de todos los cargos por la justicia penal; por tales hechos mi poderdante sufrió psicológicamente y fue rechazada socialmente, al encontrarse privada injustamente de la libertad, por conducta punible que nunca cometió, misma que es reprochable por la sociedad, como lo es el delito de Tráfico o Porte de Estupefacientes (Art. 376 del C.P.), privación injusta de la libertad que sucedió en hechos que se relatan a continuación.

3.- Para el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012) los Policías **MAURICIO GARCIA MOTTA** y **YAIR C. CABRERA SERNA**, suscriben **Informe de Vigilancia en Casos de Captura en Flagrancia**; en donde manifiestan:

"...SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 05:15 HORAS DEL DIA DE HOY CUANDO REALIZAMOS PUESTO DE VERIFICACIÓN ANTECEDENTES Y REGISTRO VEHÍCULOS EN EL CAI CORALIA, EN LA VIA QUE DE TULUA CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, AL REALIZARLE LA ORDEN DE PARAR AL VEHICULO TAXI DE SERVICIO PUBLICO PLACA VNB 828 HIUNDAY CONDUcido POR EL SEÑOR DIEGO FERNANDO MILLAN IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 14.796.528 DE TULUA VALLE, RESIDENTE CARRERA 28ª NUMERO 16-40 BARRIO SAN ANTONIO DE TULUA, 29 AÑOS, SOLTERO, TAXISTA DE PROFESIÓN, CUARTO DE PRIMARIA, HIJO DE LUZ MARINA Y PADRE DESCONOCIDO, DONDE SE MOVILIZABAN DOS MUJERES EN LA PARTE POSTERIOR DEL VEHÍCULO QUIENES SEGÚN EL CONDUCTOR DE TAXI LAS RECOGIÓ EN EL BARRIO LA QUINTA DE LA LOCALIDAD Y LE PIDIERON EL SERVICIO HACIA EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO LAS MUJERES TRAÍAN UN COSTAL ESTOPA BLANCO EL CUAL AL VERIFICAR SU COTENIDO SE LE HALLARON CINCO PAQUETES ENVUELTOS EN BOLSA VERDE CON OLOr Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LA MARIHUANA AL PREGUNTARLES POR LO HALLADO MANIFESTARON QUE ERA UN ENCARGO QUE DESCONOCÍAN LO QUE CONTENÍA EN SU INTERIOR, ES DE ANOTAR QUE LAS MUJERES CORRESPONDEN A LOS NOMBRES DE XIMENA MARIN C.C. 1.116.245.184 DE TULUA, 27 AÑOS, SOLTERA, AMA DE CASA, HIJA DE LUZ MARINA MARIN RESIDENTE EN LA CARRERA 16 NUMERO 19-54 BARRIO LOS OLMOS DE LA LOCALIDAD, NACIDA 01-04-1989, 23 AÑOS Y LA SEÑORA SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES C.C. 1.116.235.919 DE TULUA, NATURAL Y RESIDENTE EN CALLE 22 NÚMERO 17-09, AMA DE CASA, HIJA DE LUIS Y MARIA, NACIDA 16-04-1985, 27 AÑOS, SOLTERA, SIN MÁS DATOS QUIENES DE INMEDIATO SE LE HICIERON SABER LOS MOTIVOS DE LA CAPTURA Y LOS DERECHOS DE QUIENES ASISTEN COMO CAPTURADOS..."



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

4.- El mismo diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012), La Policía Judicial realiza entrevista al señor **DIEGO FERNANDO MILLAN**, el conductor del taxi al momento de la captura, el cual relata.

"...YO ESTABA LABORANDO DURANTE EL TURNO EN EL VEHICULO TAXI DE PLACAS VNB 828, ME ENCONTRABA EN EL LAVADERO LA ESPERANZA HACIENDO LAVAR EL CARRO PARA ENTREGAR EL TURNO, IBAN A SER COMO LAS 04:55 DE LA MAÑANA CUANDO RECIBÍ UNA LLAMADA DE L CELULAR 3162699363 ERA UNA MUCHACHA, PARA QUE LE HICIERA UNA CARRERA, YO LE DIJE QUE ME ESPERARA PORQUE YO ME ENCONTRABA EN EL LAVADERO Y ELLA ME DIJO QUE AL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, EN LA DIRECCIÓN MÁSS EXACTA NUMERO 23-53 AL CALLEJON LOS PINOS, ESTANDO ALLI SE SUBIERO AL TAXI DOS MUCHACHAS, QUIENES TRAIN CONSIGO UN COSTAL EL CUAL YO NO SABÍA QUE TRAÍA EN SU INTERIOR, ELLAS LO SUBIERON EN LA PARTE DE ATRÁS Y LO TRAÍAN EN EL MEDIO DE LAS PIERNAS DE LAS DOS CUANDO VENIA A LA ALTURA DEL CAI CORALIA ME PARARON LOS AGENTES DE POLICIA ME SOLICITARON UNA REQUISA PERSONAL Y DEL VEHÍCULO CUANDO SE BAJARON LAS SEÑORAS REVISARON EL COSTAL QUE TRAÍAN EN LAS PIERNAS, LO ABRIERON PARA VER SU CONTENIDO, ENCONTRATON QUE ERA MARIHUANA, **PREGUNTADO** USTED CONOCÍA A LAS SEÑORAS QUIENES USTED RECOGIO A PRESTARLE EL SERVICIO DE TAXI **CONTESTADO** DE CONOCER NO, SOLO A UNA DE ELLAS UN DÍA YO LE HICE UNA CARRERA POR EL SECTOR DEL HOSPITALITO Y ME PIDIO EL NUMERO MIO DE CELULAR **PREGUNTADO:** USTED TENÍA CONOCIMIENTO DE LO QUE TRANSPORTABAN ESTAS SEÑORAS EN EL INTERIOR DEL COSTAL **CONTESTADO** NO. ELLAS SOLO ME PIDIERON EL SERVICIO PARA LLEVARLAS AL CORREGIMIENTO DE NARIÑO YO LAS RECOGÍ POR EL LADO DE LA CAMPIÑA **PREGUNTADO** USTED TIENEALGUN TIPO DE AMISTAD CON ELLAS **CONTESTADO:** NO, SOLO A UNA DE ELLAS ES LA SEGUNDA VEZ QUE LE PRESTO EL SERVICIO **PREGUNTADO** COMO HICIERON ELLAS PARA TENER SU NUMERO DE CELULAR PERSONAL **CONTESTADO** UN DÍA YO RECOGÍ UNA DE LAS SEÑORAS LA LLEVE HASTA EL HOSPITALITO Y ELLA ME DIO 3000 PARA QUE LE HICIERA LA RECARGA ENTONCES ELLA ME PIDIÓ EL NUMERO PARA MARCARE PARA QUE LE CONFIRMARA CUANDO LE HICIERA LA RECARGA DE AHÍ ES QUE ELLA TIENE MI NUMERO **PREGUNTADO** CUANTO HACE QUE USTED MANEJA TAXI **CONTESTADO** HACE 10 AÑOS APROXIMADAMENTE..."

5.- La noticia criminal es radicada en la Fiscalía **con el No. de CASO 76-834-60-00187-2012-04123**

6.- El afán de la Fiscalía y del señor Juez de Control de garantías, al momento de actuar en las audiencias preliminares, uno proponiendo la Medida de Aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, y el otro, el Juez, decretándola, siendo cierto que no se evidenciaba como necesaria adecuada y proporcional, tan solo se tuvo en cuenta criterios de gravedad y modalidad de la conducta imputada que para la fecha de las audiencias preliminares, claramente la ley indicaba que no era suficiente aquella gravedad y modalidad de la conducta, sino que se debía también analizar los fines constitucionales de la detención preventiva (art. 310 del C.P.P), lo cual se evidenció que no se hizo, al momento de tomar semejante decisión de detención preventiva en centro carcelario, cuando se pudo optar por otra clase de medida menos gravosa conforme lo indica el art. 307 del C.P.P, y para la época, las premisas que indicaba la Sentencia C-154 de 2007, que propugnaba por la utilización de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

7.- La decisión del Juez Cuarto Penal Municipal de la ciudad de Tuluá, es apelada por el abogado defensor, el Dr. **LEONARDO FABIO FRANCO GUZMAN**, el cual en su discurso advierte que la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, tiene bajo su abrigo a su señora madre **MARIA ARACELLY CIFUENTES DIAZ**, persona perteneciente a la tercera edad y al menor **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES**, en aras de que le fuera sustituida la detención carcelaria por una detención domiciliaria, misma solicitud que no fuera atendida en segunda instancia confirmando la de primera, por lo cual se mantuvo retenida en centro carcelario.

8.- La Fiscal Treinta y Dos (32) Seccional suscribe Escrito de Acusación en donde establece que:

*"...Al ser conducidas las capturadas ante el Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Tuluá el 20 de diciembre de 2012, impartió legalidad a la incautación de la evidencia, igualmente legaliza la captura, en la susodicha audiencia preliminar la Fiscalía realiza imputación en calidad de **COAUTORAS** por el delito de **TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES** de conformidad con lo establecido en el artículo 378 Inciso **TERCERO**, verbo rector **"TRANSPORTAR"**, que impone una pena de 128 a 360 meses de prisión y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) S.M.L.M.V. Las imputadas **NOSE ALLANARON** a los cargos formulados por la Fiscalía. **Se impone medida de Aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a XIMENA MARIN y SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES.** (Negrilla por la suscrita)*

*Al tenor de las circunstancias de modo, tiempo y lugar antes narradas, queda claro que **XIMENA MARIN** y **SANDRA YULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, fueron sorprendidas en flagrancia, en los términos indicados en el numeral 1ª del artículo 301 de la Ley Instrumental Penal, en el entendido que fueron sorprendidas y capturadas **TRANSPORTANDO** sin permiso de autoridad competente, sustancia prohibida que produce dependencia, como es **MARIHUANA** en cantidad de 12.835 gramos, razones que justifican elegirlo como **AUTORAS** del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, con arreglo a la descripción abstracta contenida en el inciso PRIMERO del artículo 376 del Estatuto Punitivo Nacional, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011 (LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA) cuya dosificación punitiva oscila entre 128 a 360 meses de prisión y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales ..."*

9.- Para el veintiuno (21) de Noviembre de dos mil trece (2013), la Fiscalía 32 Seccional y la Defensa, acuden ante el Juez de conocimiento, para solicitar la Preclusión del asunto en favor de la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, siendo dirigida por el Juez Tercero Penal del Circuito de Tuluá, con el siguiente sentido en la decisión:

*"...Luego de verificar la asistencia de las partes, la fiscal 32 seccional Dra. ANA MARIA MONTOYA MOLANO, el abogado defensor de confianza Dr- LEONARDO FABIO FRANCO GUZMAN, y la acusada SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES, quien se encuentra detenida en la cárcel de esta ciudad; acto seguido una vez escuchada las sustentación de la solicitud de preclusión hecha por la fiscal 32º Seccional, el señor Juez procedió de manera oral a proferir y dar lectura del **auto interlocutorio de primera instancia No. 089** de la fecha, mediante el cual decidió acoger la petición incoada por la fiscalía y en consecuencia **DECRETÓ LA PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL**, y por consiguiente la cesación de la misma, con efectos de cosa juzgada que se adelantaba en contra de la*



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

señora SANDRA JULIETH CIFUENTES, por la conducta punible de TRAFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.."

La Solicitud de Preclusión, solicitada por la Fiscalía 32 Seccional, fue fundamentada con la entrevista del quince (15) de Mayo de dos mil trece (2013) realizada a la señora **XIMENA MARIN**, entrevista que es presentada por la Fiscalía en Audiencia, así:

"...Dice que en ningún momento le comentó a su amiga el contenido del alijo, ya que desde la noche anterior le pidió el favor de acompañarla a reclamar una encomienda en el barrio la quinta, donde residen hasta el corregimiento de Nariño, ya que le daba miedo salir sola tan temprano de su casa; pues tenían que ir a la cinco de la mañana, y así lo hicieron. Salieron a las cinco, y cuando regresaban al pasar por el CAI las paró la Policía y les encontraron el costal con marihuana. Dice también que es la primera vez que se arriesgaba a hacer una cosa de estas y que no le dijo a su amiga porque precisamente nadie podía saber eso. Incluso considera que fue una trampa que les tendieron, porque ahora que está detenida se da cuenta de quienes la capturaron eran policías de las SIJIN...

...Indica que su amiga fue de gancho ciego..."

10.- La obligación emerge directamente del nexo causal que existe entre la falla de la administración de justicia, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad que sin lugar a dudas no solo obligó a mi representada a soportar una carga que no estaba en la obligación de resistir, sino, que la sometió a una prolongada y angustiosa espera, le vulneró su derecho al buen nombre, a la honra y a la dignidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

DAÑO ANTIJURÍDICO COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

La **Constitución Nacional prevé en el art. 90** que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En este caso - la responsabilidad patrimonial del Estado, por **"Error Judicial"** permite ahora a mi poderdante, acudir ante la justicia contenciosa administrativa para que a través del Medio de Control Judicial y Demanda de Reparación Directa, reclame del Estado, el pago de las sumas de dinero que se le deberán liquidar a su favor, como indemnización de perjuicios por el proceso penal que debió soportar injustamente, a causa de la falla de la administración de justicia en cabeza de varios de sus funcionarios.

Como lo consagra el art. 140 de la ley 1437 de 2011: *"En los términos del art. 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado" (...), de acuerdo a lo*



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

anterior, para mi poderdante se constituye la existencia de una obligación a su favor, de origen extracontractual actualmente exigible de pagar una cantidad líquida de dinero como se desprende y prueba con los documentos anexos.

El art. 9 No 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, apunta a que debe haber reparación en caso de encarcelación ilegal como lo es el caso. Igualmente el No 6. Del art. 14 del mismo Pacto Internacional, indica: ***"... Cuando una sentencia condenatoria en firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido..."***

Uno de los fundamentos para aceptar la responsabilidad del estado por una deficiente administración de justicia es la **Falla del Servicio Público**, al igual que para las demás actuaciones del Estado por las que debe responder; si se tiene en cuenta que sus obligaciones se basan fundamentalmente en la protección de la vida, honra y bienes de los asociados, para asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales tanto del estado mismo como de los particulares, es apenas obvio que de mediar un incumplimiento para llevar estos fines a la realidad se derive como consecuencia la responsabilidad del ente, entendiendo que estos fines constituyen una obligación latente y no un mero enunciado filosófico. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema ampliamente, y con fundamentos legales claros, tanto de la anterior Constitución, como de esta, ha llegado a la conclusión anotada. Ver Sentencias del Consejo de Estado:

SECCION TERCERA SUBSECCION A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012)
Radicación número: 73001-23-31-000-2000-01402-01(22701) Actor: SECUNDINO MORA PATIÑO Y OTROS Demandado: NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12076 y Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15980. Sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes números 13232 y 15646, Consejero Ponente doctor Alíer Eduardo Hernández Enríquez.

Expediente 85001 23 31 000 1999 0351 (23381) de 2011, 2012-02-08. NUEVAMENTE LA FISCALÍA RESPONDE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EN ESTE CASO DE UN CIUDADANO VINCULADO "IRREGULARMENTE" A INVESTIGACIÓN PENAL. Analizados los elementos de prueba aportados, la Sala encontró acreditado que la actuación de la Fiscalía constituyó el factor determinante para que la privación de la libertad del ciudadano



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

*resultara injusta, pues pese a las inconsistencias con la identidad del presunto autor del delito de estafa, la Fiscalía profirió orden de captura. **Modifica.** M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. **Documento Disponible al Público en Marzo de 2012.** Temas: Principio Universal de Presunción de Inocencia. Prisión Arbitraria. Daño Antijurídico.*

Si bien es cierto que la falla del servicio como fundamento de responsabilidad estatal, no exige de parte del afectado la identificación particular del agente que causó el perjuicio, pero cuando se alega, no se presume ni la responsabilidad, ni la culpa, lo que obliga a probar que el servicio no funcionó de manera adecuada, funcionó tardíamente o simplemente no funcionó, y además que ese hecho causó un daño y que entre estos dos elementos existió relación de causalidad. Cuando se fundamenta la responsabilidad del Estado en la Falla del Servicio desaparece el problema de la culpa personal del funcionario y de esta manera se abre paso a una culpa anónima en la prestación del servicio.

La Responsabilidad Patrimonial del Estado por falla en la administración de justicia, según lo previo el art. 65 y 68 de la Ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia que reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales. Modificada por la ley estatutaria 1285 de 2009, en la que se establece, sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado que: *"el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad", "Privación injusta de la libertad: quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios".*

Los cuales en el caso que nos ocupa se configuran en su totalidad, como quiera que a mi representado se le privo injustamente de su libertad, a través de un errado proceso penal y por último **se le concedió la libertad tras haber estado privada injustamente de la libertad, por espacio de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DIAS (337) días equivalentes aproximadamente a ONCE (11) MESES y SIETE DIAS,** tiempo durante el cual se adelantó el proceso penal en su contra, terminando con la preclusión de la investigación, a su favor, por lo tanto, consideramos que a consecuencia de lo anterior la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, en calidad de procesado por la justicia penal y absuelto de todos los cargos, y en representación legal de sus menor hijo **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES**, su señora madre **MARIA ARACELLY CIFUENTES DIAZ** y su hermana **MARÍA EUGENIA CIFUENTES CIFUENTES**, tendrán derecho a obtener la consiguiente reparación.

La obligación emerge directamente del nexo causal que existe entre la falla de la administración de justicia, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad que sin lugar a dudas no solo obligó a mi



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

representada a soportar una carga que no estaba en la obligación de soportar sino que la sometió a una prolongada y angustiosa espera, le vulneró su derecho al buen nombre, a la honra y a la dignidad.

De lo anterior surge la obligación económica de la Nación a través de los representantes de la Rama Judicial, y de la Fiscalía General de la Nación, de indemnizar los perjuicios causados y reparar el daño producido por la conducta de sus funcionarios en la persona de la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**.

Tenemos, además de la falla del servicio y como fundamento a la responsabilidad del Estado por error judicial, el daño considerado en sí mismo, pues la administración debe actuar conforme a derecho y si en alguna oportunidad causa un daño (inclusive en lo referente a la justicia) que el ciudadano no está obligado a soportar, el Estado debe indemnizar, para asegurar de esta manera que tanto los derechos fundamentales como los demás derechos de las personas, deben ser respetados y en caso de no serlo, ellos deben obtener un resarcimiento. Con base en esta proposición, se tiende a la responsabilidad objetiva, ya que la idea de culpa se convierte, en el fondo, en un criterio de imputación, que traspasa los efectos del perjuicio del patrimonio de la víctima al de la administración.

El objeto de la reparación del daño no se basa en la sanción de una ilegalidad o en el instituto de la culpa personal, sino en resarcir el perjuicio con el fin de cumplir con el objetivo de mantener a los administrados en situación de igualdad ante las cargas públicas que deben soportar, por lo cual la teoría de la responsabilidad se convierte en un sistema de garantías para los ciudadanos.

Por lo tanto, además de cimentar sus bases en la falla del servicio público, me atrevo a incluir las teorías del Estado de Derecho y de la Igualdad ante las Cargas Públicas.

LAS PERSONAS EN EL PROCESO Y SUS REPRESENTANTES

Parte demandada: La Nación – Rama Judicial, representada en este caso por el señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial, designado para la representación de la Nación- Rama Judicial, Seccional Cali-Valle y **la Nación-Fiscalía General de la Nación** representada en este caso por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Cali-Valle, o por quienlos represente, los reemplace o haga sus veces.



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

De la presente deberá darse traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al señor Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho judicial con quien ha de surtirse la tramitación del proceso por competencia.

Partes demandantes: SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES, identificada con la **C.C No. 1.116.235.919 de Tuluá (V)** en nombre propio y en representación de su menor hijo **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES**, y las señoras **MARÍA ARACELLY CIFUENTES DIAZ C.C No. 29.850.683 de Tuluá (V)**, y **MARIA EUGENIA CIFUENTES CIFUENTES**, identificada con **C.C No 66.680.847 de Zarzal – Valle**.

Apoderada de la Parte Demandante: Dra. CLAUDIA LILIANA RESTREPO ESPINOSA, identificada con la C.C No. 29.873.663 de Tuluá – Valle, abogada en ejercicio con T.P No. 173.108 del C.S.J.

PRUEBAS

Ruego sean tenidas en cuenta las siguientes:

I. Documentales:

1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de las señoras **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, en calidad de procesada por la justicia penal y absuelta de todos los cargos, y en representación legal de su menor hijo **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES**, su señora madre **MARIA ARACELLY CIFUENTES DIAZ**, y su hermana **MARÍA EUGENIA CIFUENTES CIFUENTES**.
2. Copia de los Registros civiles de nacimiento de **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES**, **MARIA ARACELLY CIFUENTES DIAZ**, y **MARÍA EUGENIA CIFUENTES CIFUENTES**.
3. Certificación de la Preclusión de la Acción Penal por el punible de Tráfico y/o Porte de Estupefacientes en contra de la señora SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES, de febrero 9 de 2015.
4. Copia magnética de la Audiencia de Preclusión Noviembre 21 de 2013.
5. Copia magnética de las Audiencias Preliminares Diciembre 20 de 2012.
6. Copia auténtica Acta de Audiencias proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Función de Garantías.



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

7. Copia auténtica Acta de Audiencia No. 147 de 2013 Audiencia Formulación de Acusación proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito.
8. Copia auténtica Acta de Audiencia No. 482 de 2013 Audiencia Decisión de Preclusión proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito.
9. Constancia No. 249 suscrita por el Director y Asesor Jurídico del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tuluá – Valle.
10. Fotocopia de Entrevista –FPJ-14- realizada al señor **DIEGO FERNANDO MILLAN**.
11. Fotocopia Formato único de Noticia Criminal con Fecha de Recepción del 19 de diciembre de 2012.
12. Fotocopia Informe Ejecutivo de diciembre 19 2012 suscrito por el Investigador Líder **HENRY HUMBERTO ECHEVARRIA ECHEVARRIA**.
13. Fotocopia Informe de la Policía de Vigilancia en Casos de Captura en Flagrancia –FPJ-5- de diciembre 19 de 2012.
14. Fotocopia de Escrito de Acusación suscrito por la Fiscal 32 Seccional de Tuluá de febrero 6 de 2013.
15. Recibos Honorarios Profesionales asunto penal.

II. Traslado de Pruebas:

Solicito con todo respeto a su despacho que de considerarlo necesario:

1. Se oficie al Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Tuluá (V), quien fue en ultimas el que decretó la Preclusión de la Acción Penal sobre la persona de **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, para que con destino a este proceso, remita copia autentica con constancia de ejecutoria de las siguientes providencias judiciales y/o documentos que aparecen evidenciados en dicho proceso o carpeta:
 - 1.1. Escrito de acusación proferido por la Fiscalía Treinta y Dos Seccional de Tuluá (V), en contra de la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, con fecha del 6 de febrero de 2013.
 - 1.2. Auto Interlocutorio de Primera Instancia No. 089 fechado el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013) en el acta No 482, proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito especializado de Tuluá (V), a través de la cual Resolvió: decretar la PRECLUSIÓN de la acción penal en contra de la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, en la cual, además, quedó claramente establecido que como quiera que contra esta decisión no se interpuso recurso de



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

apelación, se declara legalmente ejecutoriada la misma. Y las partes quedaron notificadas en estrados.

- 1.3.** La totalidad del expediente que conforma el proceso penal, radicado bajo el No. 2013-00017-00, seguido en contra de la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, en el cual se profirió decisión el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013), a través de la cual se decretó la PRECLUSIÓN de la acción penal en contra de la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**.
- 1.4.** Solicito se requiera al Director de la Cárcel de la ciudad de Tuluá (Valle) y/o quien haga sus veces, para que con destino a este proceso certifique de conformidad con la base de datos de los establecimientos carcelarios en Colombia, el tiempo que duró privada de la libertad y recluida en este establecimiento carcelario la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.116.235.919 de Tuluá – Valle y por orden de qué autoridad judicial.

III. Testimoniales:

Con todo respeto y con el fin de demostrar los perjuicios materiales y extrapatrimoniales sufridos por la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, y los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por su familia, conformada por **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES (hijo)**, **MARIA ARACELLY CIFUENTES DÍAZ (madre)** y **MARÍA EUGENIA CIFUENTES CIFUENTES (hermana)**, solicitamos a su despacho se sirva citar a las siguientes personas para que testifiquen sobre el dolor y el sufrimiento que padeció la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES y su familia**, durante el tiempo en que estuvo privada injustamente de su libertad:

- Solicito se sirva citar al Despacho, previa fijación de fecha y hora, a la señorita **YAMILE PATRICIA MONSALVE ZAPATA**, identificada con la C.C No. 31.792.776 de Tuluá – Valle, quien podrá testificar al menos de los sufrimientos sociales y morales a los cuales se vio abocada la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES Y SU FAMILIA**, ya que se trata de una persona cercana de aquellos y que pudo darse cuenta de lo sucedido.
- Solicito se sirva citar al Despacho, previa fijación de fecha y hora, al señor **JORGE HERNANDO BASTIDAS MAFLA**, quien se identifica con la C.C No. 94.367.843 de Tuluá (V); quien podrá testificar al menos de los sufrimientos sociales y morales a los



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

cuales se vio abocada la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES Y SU FAMILIA**, ya que se trata de una persona cercana de aquellos, la cual pudo darse cuenta de lo sucedido.

Los anteriores pueden ser localizados por medio de la suscrita y ser notificados en la dirección aportada para este efecto.

IV. Prueba Pericial:

- **VALORACIÓN PSIQUIATRICA O PSICOLOGICA:** Teniendo en cuenta que la base fundamental de esta demanda es el reconocimiento de perjuicios morales y los del daño a la vida de relación, consideramos de extrema importancia que la parte demandante sea apoyada por el Estado, através del Instituto Nacional de Medicina Legal, para que a través de sus expertos, o peritos en la materia, se determine cuales habrían sido los daños psiquiátricos y/o psicológicos que le fueran causados a la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES** y a su familia, debido a la privación injusta de su libertad, por error judicial que sufriera ella misma, pues a pesar del paso del tiempo, con toda seguridad el perito puede vislumbrar el daño ocasionado que en algunas circunstancias es permanente.
- Para el desarrollo de esta prueba pericial, se hace necesario el apoyo del Instituto de Medicina Legal del Valle del Cauca, en el lugar más cercano a la residencia de la demandante, que lo es el municipio de Tuluá – Valle.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

Es competencia del Juez Administrativo Reparto de la ciudad de Guadalajara de Buga, por la naturaleza del medio de control, por el lugar donde ocurrieron los hechos que originaron el proceso penal que lo fuera la ciudad de Tuluá - Valle, por los despachos judiciales donde se produjeron los fallos judiciales a través de los cuales se privó

injustamente de la libertad de la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES (Tuluá – Valle)** y por ser el lugar donde se cometieron las omisiones y los errores judiciales, por las normas de competencia del Código Contencioso Administrativo y la ley 270 de 1996, con soporte además en la Sentencia del Consejo de Estado del 09 de Septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 110010326000200800009 00 y especialmente por la cuantía que se deriva



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

de aquella, conforme al Código Contencioso Administrativo artículo 155 No. 6 de la Ley 1437 de 2011, que indica que en los procesos de esta índole, “cuando la cuantía no exceda de (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, la cual se determina de la siguiente manera:

Estimación Razonada de la Cuantía:

A) Indemnización causada:

1. POR PERJUICIOS MATERIALES:

Los cuales comprenden el **Lucro Cesante y el Daño Emergente:**

PARA LA SEÑORA SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES

1.1. Lucro Cesante: Tomando como base desde la fecha de la detención injusta de la libertad, que ocurrió el día **veinte (20) de diciembre de dos mil doce (2012)**, día en el que ingresó al establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de Tuluá (V), hasta la fecha de presentación de la solicitud de conciliación en su momento ante la procuraduría para cumplir con el requisito de procedibilidad, y teniendo en cuenta que la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, se desempeñaba como empleada del servicio, labor con la cual obtenía su sustento diario y el de su familia, y como quiera que a la fecha no hay forma de demostrar cuanto era en total lo que devengaba mensualmente, con todo respeto estimamos, que se deberá tener en cuenta que, por lo menos, percibía un salario mínimo legal mensual vigente, según la presunción legal que se desprende de lo establecido en el Art 145 del Código Sustantivo del Trabajo, la jurisprudencia que sobre este tema es abundante y demás normas concordantes.

A la fecha su situación económica no es la mejor, pues, no ha sido fácil para una persona que ha sido privada de su libertad y menos por la clase de delito que se le imputó, desarrollar fácilmente ninguna actividad que le genere ingresos debido a la estigmatización social, en especial porque en este caso los medios de comunicación tanto a nivel local, regional y nacional, dieron cuenta de su captura, el antecedente de haber estado privada de la libertad por esta clase de delito ha sido grave para su vida social y por consiguiente, ya que se presume que por lo menos devengaba un salario mínimo mensual legal vigente, desde el día veinte (20) de diciembre de dos mil doce (2012) hasta la fecha en que se le concedió su libertad 21 Noviembre de 2013, consideramos que por el error judicial en su contra - ha producido la imposibilidad de trabajar de manera continua, hasta el punto en que mi poderdante se vea imposibilitada en encontrar algún trabajo en casa de familia, sin que haya podido ejercer su profesión de empleada doméstica debido a la estigmatización, por



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

lo cual por concepto de los perjuicios materiales de lucro cesante, se deberá pagar un valor correspondiente al salario mínimo mensual vigente actualizado por su salarios y primas legales, lo que sería 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más dos salarios adicionales, por las primas legales del mes de diciembre de 2012, y el mes de Junio del año 2013, para un total de:

\$ 8.376.550=M/C.

1.2 DAÑO EMERGENTE:

Son aquellos daños patrimoniales que se producen con inminencia y que en caso, lo constituyen los emolumentos que debió utilizar la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, para defenderse de la grave acusación que se hacía en su contra por parte de la fiscalía general de la nación a través de su delegada novena seccional de la ciudad de Tuluá en Turno de URI, y que afectó a toda su familia cercana.

Costos Honorarios Abogado Defensor: \$ 10.000.000= M/C.

Total Daño Emergente: \$ 10.000.000=M/C.

Total Perjuicios Mínimos Materiales a Favor de la señora SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES: \$18.376.550 =M/C.

2. POR PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES – INMATERIALES. **PARA LA SEÑORA SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**

2.1 Perjuicios morales:

2.2 Por concepto de Perjuicios Morales teniendo en cuenta la aflicción interna que sufrió al verse privada injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y por la clase de delito que la ha estigmatizado ante toda la sociedad (porte ilegal de estupefacientes). **En OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. (\$51.548.000.00) M/C**, actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A., mediante los mecanismos, fórmulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado, esto porque la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, no solo fue detenida y privada de su libertad injustamente por espacio de 336 días, sino que además, debió sufrir el largo proceso penal, con la consabida angustia de no saber que podría suceder con su libertad, hasta que finalmente el proceso penal terminó con su **ABSOLUCION** a través del mecanismo



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

de la preclusión, conforme la decisión del Juez Tercero Penal del Circuito de la ciudad de Tuluá, el pasado 21 de Noviembre de 2013, a solicitud de la defensa y la fiscalía.

Subtotal Mínimo: \$51.548.000.oo=M/C.

2.3 Daño a la vida en Relación: a su profesión como empleada doméstica

2.4 La señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, de 30 años de edad, una madre soltera dedicada al sostenimiento de su hogar, su señora madre anciana y su menor hijo, consideramos le fue afectada su vida de relación, pues la estigmatización que produjo el denotado y errado proceso judicial en su contra en una ciudad relativamente pequeña como lo es la ciudad de Tuluá, en donde a no dudarlo la acusación que hicieron en su contra la dejó al margen del mercado laboral, así fuera de carácter tan humilde como lo es el empleo del servicio doméstico, por lo cual lo consideramos en otros **OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES \$ \$51.548.000.oo=M/C**, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado. Teniendo la claridad de que al verse manchado el buen nombre de mi mandante, volver a desenvolverse en actividades de servicio doméstico se le dificulta, por el rechazo social que se presenta hacía las personas que estuvieron privadas de su libertad y al ser este oficio algo que en definitiva depende de la confianza que deposite quien contrata al empleado, cosa bastante conflictiva en el entorno social que vivimos, puesto que la señora **SANDRA JULIETH** tiene la referencia de haber estado en una cárcel varios meses.

Subtotal Mínimo: \$\$51.548.000.oo=M/C.

**Subtotal Mínimo por extra-patrimoniales o inmateriales
\$103.096.000.oo=M/C.**

PARA SU HIJO JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES

Perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor moral, la angustia y la aflicción interna que sufrió al ver a su señora Madre, la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, privada injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y teniendo que sufrir con los comentarios de la sociedad. **EN OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES \$51.548.000.oo=M/C**, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado.

Subtotal Mínimo: \$51.548.000.oo=M/C.



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

PARA SU MADRE MARIA ARACELY CIFUENTES:

Perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor moral, la angustia y la aflicción interna que sufrió al ver a su hija, la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, privada injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y teniendo que sufrir con los comentarios de la sociedad. **EN OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES \$51.548.000.oo=M/C**, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado.

Subtotal Mínimo: \$51.548.000.oo=M/C.

PARA SU HERMANA MARIA EUGENIA CIFUENTES CIFUENTES:

Perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor moral, la angustia y la aflicción interna que sufrió al ver a su hermana, la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, privada injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y teniendo que sufrir con los comentarios de la sociedad. **EN OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES \$51.548.000.oo=M/C**, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado.

Subtotal Mínimo: \$51.548.000.oo=M/C.

Total Perjuicios Extra-patrimoniales – Inmateriales: \$ 257.740.000.oo=M/C

RESUMEN DE PERJUICIOS:

Perjuicios Patrimoniales para la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**

\$ 18.376. 550=M/C

Perjuicios extra-patrimoniales para la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES:**

\$ 103.096.000=M/C.

Perjuicios Extra patrimoniales para **JUAN DAVID OSORIO CIFUENTES:**

\$ 51.548.000=M/C

Perjuicios Extra patrimoniales para **MARIA ARACELY CIFUENTES DIAZ:**

\$ 51.548.000=M/C

Perjuicios Extra patrimoniales para **MARIA EUGENIA CIFUENTES CIFUENTES:**

\$ 51.548.000=M/C



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

Total Perjuicios Mínimos Causados:

\$276.116.550=M/C

En consecuencia, la estimación razonada de la cuantía es en suma superior a los **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CINECUESTA PESOS MONEDA CORRIENTE \$276.116.550.00=M/C**, la cual deberá actualizarse – indexarse hasta la fecha del pago efectivo, de conformidad con lo previsto en el art. 187 de la Ley 1437 de 2011, mediante los mecanismos, formulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, esto porque la señora **SANDRA JULIETH CIFUENTES CIFUENTES**, no solo fue detenida injustamente por espacio de trescientos treinta y siete (337) días, sino, porque además ella y su familia, sufrieron la vergüenza y el rechazo social a raíz del mencionado proceso penal, del cual finalmente fue absuelta.

En reciente jurisprudencia sobre el pago de los perjuicios extra-patrimoniales por la privación injusta de la libertad el Honorable Consejo de Estado ha dicho que:

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad¹.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño, por la privación injusta de la libertad². Así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades³. Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el actor no está en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la Administración de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.⁴.

OPORTUNIDAD DE LA PRESENTE DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA

El medido de control de reparación directa tiene una caducidad de 2 años, contados a partir de la ocurrencia de los hechos, que en este caso comienza a contarse a partir de la fecha en que se produjo el **Fallo interlocutorio No 089 del 21 de Noviembre de 2013 producido por el Juez Tercero Penal del Circuito de la ciudad de Tuluá – Valle, con efectos de cosa**

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

² Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076.

³ Sentencia de 20 de febrero de 2.008, expediente 15.980.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 22701, actor: Secundino Mora Patiño y otros.



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

juzgada que decidió la preclusión del proceso judicial penal que fuera adelantado en su contra por la fiscalía general de la Nación, por el presunto delito de Tráfico, Fabricación o porte de estupefacientes art. 376 del C.P, y en favor de la señora SANDRA YULIETH CIFUENTES CIFUENTES, cargo penal que le fuera imputado injustamente, por cuanto en el proceso penal se estableció que no había incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito y además, no existió ninguna prueba en su contra, y como quiera, que contra esta decisión no se interpuso recurso de apelación, se declaró legalmente ejecutoriada la misma, y las partes quedaron notificadas en estrados, ya que no es admisible la ejecutoria parcial de las providencias, tal como lo ha afirmado el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto estoy en tiempo de formular la presente demanda.

JURAMENTO ESTIMATORIO DE LA CUANTÍA

Resulta ahora necesario para esta representación judicial - manifestar bajo la gravedad del juramento que además se considera prestado con la presentación de este escrito, que la estimación razonada de la cuantía que a continuación se detalla es la pretendida razonadamente por las partes aquí demandantes, de conformidad con el **artículo 206 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012**.

NATURALEZA DEL CONTENCIOSO

Se ejercita el Contencioso o medio de control de Reparación Directa previsto en el Artículo 140 del Código Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

DERECHO

Además de las normas que se han citado, invoco el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, Ley 270 de 1996 reformada por la Ley 1285 de 2009, los artículos 140 y 164 Literal I del C.C.A. Ley 1437 de 2011, y demás disposiciones concordantes.

PROCEDIMIENTO

Deberá seguirse el procedimiento previsto en los artículos 179 y subsiguientes del C.C.A Ley 1437 de 2011.



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa

Abogada Titulada

Universidad Central del Valle del Cauca

ANEXOS

1. Poderes legalmente conferidos, con los cuales se acredita la personería de la suscrita con expresas facultades para conciliar.
2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
3. Acta de la audiencia prejudicial del día veintidós (22) de octubre de 2015 que se llevó a cabo ante el Procurador 60 Judicial I delegado para asuntos Administrativos.
4. Constancia del Procurador 60 Judicial I delegado en lo Administrativo de la ciudad de Cali (V) en la cual consta que se adelantó todo el trámite legal correspondiente, para dar por cumplido el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en acción de reparación directa por los hechos acá mencionados.

NOTIFICACIONES

- ✓ **La Nación - Rama Judicial:** Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial Seccional Cali, Carrera 5 No. 12-42 piso 5, Tel: 8846342.
dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Fiscalía General de la Nación Seccional Valle,** Calle 10 No. 05 – 77 piso 8 Edificio San Francisco Teléfono: 392 79 00 Cali – Valle. disfiscal@fiscalia.gov.co
- ✓ **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO:** Carrera 7 No.75 - 66 Piso 2 y 3. Teléfono: 2558955 Bogotá D.C. mesaayuda@defensajuridica.gov.co y mesaayuda.litigob@minjusticia.gov.co
- ✓ **Los demandantes y su apoderada judicial:** en la Calle 32 No. 26 – 39 B/Salesiano de la ciudad de Tuluá (V), telefax: 225 46 85, o en la secretaría de su despacho. Correo electrónico: claudiarestrepoabogada@gmail.com

Atentamente,

CLAUDIA LILIANA RESTREPO ESPINOSA
C.C No. 29.873.663 de Tuluá (V)
T.P No. 173.108 del C.S.J.



Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

7 c